

LA CLAVE

ANUNCIO DE ERC

Oriol Junqueras y el resto de los dirigentes republicanos presentaron ayer los avales

para que no levanten el pie y no dejen de acudir al rescate de los 34 encausados.

Con la querrela de Ciudadanos aún reciente, el Tribunal de Cuentas analizará este lunes toda la documentación recabada y tendrá que decidir si acepta el aval impulsado por el Govern o lo tumba, como así puede acabar pasando, según fuentes jurídicas consultadas, que dudan de la legalidad de acudir a un fondo público para realizar este tipo de pagos. Anoche, Esquerra aseguraba que todos sus políticos encausados habían presentado los avales ante el tribunal.

Desde Esquerra se acusa al PP de utilizar el órgano fiscalizador como ariete político para perseguir a sus rivales y se insta al Ejecutivo a actuar bajo el argumento varias veces repetido de que lo que se persigue es la muerte civil de los líderes independentistas.

Elusión del PSOE

No habrá pistas sobre la oferta que Pedro Sánchez pretende plantear a la Generalitat de Cataluña a partir de septiembre en la ponencia marco del PSOE para su 40 Congreso federal. Al menos, no en la primera versión que este sábado presentará en un acto en Madrid la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, junto a la presidenta, Cristina Narbona y las dos coordinadoras del documento interno, Lina Gálvez y Hana Jalloul.

El texto que marca las líneas estratégicas en las que pretende moverse la formación en los próximos años, y que aún debe someterse a las enmiendas de las agrupaciones antes de ser debatido en el cónclave previsto para los días 15, 16 y 17 de octubre en Valencia, incluye un capítulo específico titulado 'España autonómica y reto demográfico' del que ha sido responsable el socialista vasco Denis Itxaso. Pero tanto fuentes de La Moncloa como de la dirección del partido advierten de que en ella no se apunta nada relativo a la mesa de diálogo que el jefe del Ejecutivo y el del Gobierno catalán, Pere Aragonès, acordaron reunir ya en la tercera semana de septiembre.

La omisión es llamativa, sobre todo, si se tiene en cuenta que en el anterior Congreso, el que coronó a Sánchez después de haber recuperado su cetro contra todo el 'establishment' socialista en las primarias frente Susana Díaz (y Patxi López), el PSOE se comprometió por primera vez a impulsar una reforma de la Constitución que «manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español –decía el texto–, perfeccione el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado».



La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ayer, antes de su ponencia en la Complutense. A. ORTEGA / EP

Belarra vuelve a presionar con la ley de vivienda

Recuerda que «los fondos buitres no votan en el Congreso» e insta a los socialistas a romper el concordato con la Iglesia

M. A. ALFONSO

MADRID. A pocas semanas de que PSOE y Unidas Podemos se sienten para negociar los Presupuestos de 2021, el partido morado ha empezado ya poner sobre la mesa sus exigencias para sacar adelante las cuentas públicas. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, volvió a exigir ayer a sus socios de Gobierno que se introduz-

ca la regulación del precio de los alquileres en la futura ley de vivienda, uno de los principales puntos de fricción entre las dos formaciones del Ejecutivo desde la investidura de Pedro Sánchez.

Belarra, que encabeza el equipo de Unidas Podemos en las negociaciones del texto desde noviembre de 2020, cuando aún era secretaria de Estado para la Agenda 2030, llegó a afejar la reunión mantenida por el presidente del Gobierno con representantes de fondos de inversión durante su viaje a Estados Unidos. «Quiero transmitirle al conjunto de la ciudadanía la tranquilidad de que los fondos buitres no votan en el Con-

greso, quienes votan son los diputados y diputadas», afirmó antes de presentar una ponencia en la Universidad Complutense de Madrid.

Eso sí, tras ser cuestionada sobre posibles reticencias de dichos fondos a la futura Ley de Vivienda, Belarra mostró su con-

La ministra de Derechos Sociales espera que la propuesta sobre la Santa Sede no se quede «en papel mojado»

Teodoro García Egea tacha de «hipócritas» a las ministras de Podemos

M. A. A.

MADRID. El secretario general del Partido Popular, el ciezano Teodoro García Egea, aprovechó ayer su participación en la Escuela de Verano que organiza su partido en Murcia para cargar contra el Gobierno central por la subida del precio de la luz y la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. En con-

creto, fue especialmente duro con las ministras de Unidas Podemos –Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero– a las que tachó de «hipócritas» por «callar» ante el elevado coste de la electricidad. «No les preocupa la gente, sino su gente», acusó.

El secretario general de los populares utilizó el mismo argumento para atacar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre

la cuestión de la electricidad. «Cuando estaban en la oposición decían que la luz subía por culpa de PP y ahora que gobiernan señalan a la UE», denunció en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

Para apoyar sus afirmaciones, adjuntó un vídeo que recoge unas recientes declaraciones de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante el Pleno del Congreso, en las que aseguraba que lo que está ocurriendo no se trata de una «situación exclusiva de España», sino que «está íntimamente asociado al diseño del

mercado mayorista con arreglo a las reglas de la UE».

García Egea, además, cree que la Justicia dirá a Pedro Sánchez «lo que piensa de los indultos, hechos contra la ley, contra el criterio de la Sala, contra el tribunal sentenciador y contra el criterio de la Fiscalía».

También criticó el nombramiento, hace ya más de un año, de la que fue ministra socialista, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado, y vaticinó que también «se pondrá negro sobre blanco sobre este caso como ha sucedido con las ayudas a la compañía Plus Ultra, que ahora están bajo sospecha».

fianza en que esta normativa va a cumplir con el acuerdo de gobierno entre ambos socios y va a regular los precios del alquiler, «homologando a España con el marco legislativo europeo ya existente», añadió.

Un día antes, en el mismo marco, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había asegurado que los fondos de inversión tiene como finalidad «ganar dinero» mientras que la meta de los gobernantes «progresistas» es «mejorar la vida de la gente».

Por todo ello, confió en que la reunión de Sánchez con estas corporaciones «se conversara sobre su fiscalidad». También quiso remarcar que Unidas Podemos «no está en el Ejecutivo para mejorar su rentabilidad».

Acuerdos con El Vaticano

En el partido morado son conscientes de que la legislatura se encuentra en un momento clave, con el proceso de vacunación avanzado y la inminente llegada de los fondos de recuperación europeos. Por ello, han abandonado el segundo plano que mantenían desde la salida de Pablo Iglesias, incluso en asuntos delicados como las protestas en Cuba o la crisis diplomática con Marruecos, y empiezan a marcar su agenda social.

En esa línea de regresar a la confrontación con sus socios, la ministra de Derechos Sociales emplazó al PSOE a romper «de una vez» con los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que datan de 1979, así como poder sacar la asignatura de Religión de las escuelas públicas, y espera que la postura del PSOE «no se quede en papel mojado».

También apostó por la reversión de las inmatriculaciones «ilegales» de la Iglesia o reclamar que abonen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en sedes y templos, para que se «corresponsabilicen» con los ingresos del conjunto del Estado.

Belarra celebró, en cambio, que los socialistas estén dispuesto a aumentar las ayudas a las familias vulnerables con hijos y recordó su propuesta para destinar 100 euros al mes a estos.



Teodoro García Egea